

Declaración pública de ACT Alianza sobre paz y derechos humanos en Israel y Palestina

ACT Alianza afirma la necesidad de dos Estados, Israel y Palestina, independientes, viables y soberanos, viviendo juntos en virtud de las resoluciones de la ONU con las fronteras de 1967 y con Jerusalén como ciudad compartida entre dos pueblos y tres religiones: los cristianos, los judíos y los musulmanes.

Hasta ahora, los Acuerdos de Oslo, firmados hace 25 años, no han logrado la paz para los israelíes y los palestinos. La promesa de estos acuerdos de "una paz justa, duradera y global" aún no se ha cumplido. Mientras que los programas de ayuda internacionales siguen sustentando la vida en los territorios palestinos ocupados, es evidente que nunca podrán lograr soluciones políticas. A pesar de que las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad han aprobado muchas resoluciones sobre la situación, sigue siendo necesario encontrar soluciones políticas y jurídicas reales para abordar las causas profundas de este sufrimiento. Dichas soluciones deberán estar basadas en los principios de derechos humanos y en el derecho internacional.

En julio, la Knesset israelí aprobó una ley básica en la cual Israel se autoproclamaba "territorio nacional del pueblo judío". Esta ley establece que "el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío". Conforme al derecho internacional y a los principios de derechos humanos, la naturaleza y la intención manifiesta de esta ley son discriminatorias, e incluyen la promoción de los asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados. Existe el riesgo de que establezca un doble rasero con respecto a los beduinos, los drusos, los cristianos y los musulmanes que deberían gozar de los mismos derechos.

Esa ha sido la situación de los palestinos desde 1948. Al mismo tiempo, los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, que son ilegales en virtud del derecho humanitario internacional, continúan su expansión en Cisjordania, y los actos violentos y las órdenes de demolición en los pueblos representan un riesgo de desplazamiento forzoso de las poblaciones vulnerables. Esto forma parte de la tendencia preocupante del gobierno de Israel de demoler estructuras sistemáticamente y desplazar a los palestinos de la zona C para permitir la expansión de los asentamientos y, potencialmente, anexionar la zona C.

A principios de este año, Estados Unidos reconoció de forma unilateral a Jerusalén como capital de Israel y trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Según la mayoría de los palestinos, esta decisión confirmó que el actual Gobierno de Estados Unidos no podrá presentarse como intermediario imparcial en ningún futuro proceso de paz. La decisión del Gobierno estadounidense de recortar programas que salvan vidas, como su apoyo al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNWRA), agravará la crisis humanitaria en Gaza y deteriorará aún más las condiciones socioeconómicas de muchas personas en Cisjordania y los territorios vecinos. Solamente en Gaza, siete de cada diez personas tienen que recurrir a la ayuda de emergencia, y la ONU ha declarado que Gaza será inhabitable en 2020 debido a la disminución en los ingresos, el deterioro de la atención sanitaria y de la educación, y la escasez de electricidad y agua potable.

El objetivo de esta decisión parece ser retirarles la condición de refugiados a los millones de palestinos que reclaman su derecho a regresar a sus antiguos hogares en Israel y el territorio palestino ocupado. Creemos

que estas decisiones solo lograrán exacerbar la catastrófica situación humanitaria y aumentar el sentimiento de injusticia, desesperanza y escepticismo ante los principios humanitarios entre los palestinos. La ayuda humanitaria no debe ser politizada.

Estos acontecimientos tienen todos los ingredientes para desembocar en nuevos decenios de violencia y miseria para todas las partes involucradas, tanto en el lado palestino como en el israelí. La agresiva y desproporcionada reacción israelí ante las manifestaciones palestinas en la Franja de Gaza a principios de este año acabó con la vida de muchas personas, y otras miles acabaron heridas o discapacitadas. Desde entonces, las noticias sobre muerte y violencia se han convertido en lo habitual. La comunidad internacional y todas las partes deben demostrar sabiduría y preocupación para encontrar una solución justa y creíble para esta situación.

ACT Alianza se suma a la petición de la Asociación Internacional de Agencias de Desarrollo (AIDA) y de muchas otras organizaciones religiosas y de la sociedad civil en Palestina e Israel de encontrar una nueva manera de proceder basada en los principios en Israel y Palestina. Este enfoque basado en la igualdad, la dignidad y la justicia, regido por el derecho internacional, debe garantizar la rendición de cuentas con respecto a cualquier violación del derecho internacional. Al igual que en el caso de los israelíes, el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino debe ser aceptado como condición previa de todo acuerdo de paz. Todo proceso de paz debe reconocer el desequilibrio de poder entre las partes e incluir la participación activa de la sociedad civil, incluyendo a las mujeres y los jóvenes. Los derechos no deberán utilizarse como herramienta en las negociaciones, y las partes no deberán declinar la correspondiente responsabilidad sobre las poblaciones vulnerables.

En Israel y Palestina, las iglesias, las organizaciones relacionadas con las iglesias y las organizaciones de la sociedad civil son los principales defensores de la paz con justicia. Actualmente, se enfrentan a restricciones cada vez más severas en cuanto a cómo se organizan, desempeñan sus funciones y expresan sus puntos de vista, a pesar de las garantías jurídicas internacionales que protegen estas libertades. La investigación llevada a cabo por ACT Alianza muestra que las organizaciones y los periodistas tanto palestinos como israelíes se enfrentan a cada vez más restricciones jurídicas, estigmatización y peligros en la labor que llevan a cabo para reducir la pobreza, proporcionar asistencia humanitaria y luchar contra las injusticias. Los trabajadores humanitarios son cada vez más el objetivo de actos violentos. Para que prospere la paz en sociedades justas y democráticas, se debe proteger también la libertad y la seguridad de las organizaciones de la sociedad civil y de los trabajadores humanitarios.

Por ello, ACT Alianza pide que:

- El gobierno de Israel cese todo tipo de violación de los derechos humanos y respete los tratados internacionales de derechos humanos y el Estado de derecho y que implemente todos los acuerdos y tratados firmados con la OLP.
- La Autoridad Palestina defienda los derechos humanos de la población palestina y respete los tratados internacionales de derechos humanos y el Estado de derecho.
- El gobierno de Israel, los países vecinos y la comunidad internacional protejan y apoyen a los refugiados palestinos y sus derechos, reconociendo plenamente el derecho internacional

- humanitario, el derecho internacional de refugiados, y el derecho internacional de los derechos humanos, y denuncien las decisiones políticas y en materia de financiamiento que reducen a las personas que viven en situación de vulnerabilidad a meros instrumentos de negociación política.
- Israel defienda la igualdad de derechos de todos los residentes de Israel.
 - Las partes del conflicto inicien un nuevo proceso de paz basado en los principios, con un enfoque en los derechos humanos y la responsabilidad de todas las partes.
 - La comunidad internacional defienda el derecho internacional sin excepción y presione activamente a todas las partes a negociar de buena fe y llegar a un acuerdo justo y duradero para los problemas que persisten. Que terceros países declaren de manera explícita, conforme al derecho internacional y los principios jurídicos, que no se puede aceptar la ocupación como situación final permanente.
 - La Administración los Estados Unidos retome el financiamiento para los palestinos y la UNRWA.
 - Las iglesias y la sociedad civil de todo el mundo muestren su solidaridad con los palestinos y los israelíes que trabajan por una paz justa basada en el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, y protejan a los defensores de los derechos humanos y a otros agentes de la sociedad civil en su búsqueda de la paz con justicia.
 - Los miembros de ACT apoyen a las organizaciones locales de la sociedad civil y promuevan una mayor protección contra las violaciones de los derechos humanos, y apoyen también a las organizaciones de la sociedad civil en los territorios palestinos ocupados y en Israel para que pidan a sus propias autoridades que rindan cuentas.
 - Los miembros y los foros de ACT Alianza establezcan diálogos de alto nivel con el gobierno de Israel y la Autoridad Palestina para evitar que prosiga la introducción de leyes que limiten el espacio de la sociedad civil y lograr la supresión de la legislación y las prácticas existentes que restringen este espacio y las libertades fundamentales.